

Santiago, dos de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En causa RUC N°1901003244-2, RIT 205-2023 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, por sentencia de veintiséis de diciembre del año dos mil veintitrés, se condenó a Erik Andrés Álvarez Bergh a las siguientes penas:

A.- Un (1) año de suspensión del empleo en su grado mínimo, en calidad de autor de un delito consumado de revelación de secreto, contemplado en el inciso 3 del artículo 246 del Código Penal, cometido el día veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en la comuna de Temuco.

B.- Quinientos cuarenta y un (541) días de presidio menor en su grado medio, además de tres años y un día de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para cargos u oficios públicos y multa de quinientos mil pesos (\$500.000), como autor de un delito consumado de cohecho, contemplado en el inciso 1 del artículo 248 del Código Penal, perpetrado en una oportunidad durante el mes de diciembre de dos mil dieciocho, en la comuna de Temuco.

En contra de la referida sentencia definitiva, el aludido sentenciado interpuso recurso de nulidad, arbitrio que fue conocido en audiencia pública celebrada el día once de abril del año en curso, notificándose a los intervinientes la fecha de lectura del fallo para el día fijado, según consta en el acta levantada en su oportunidad.

Finalmente, se debe consignar que el recurrente hizo renuncia expresa a la prueba ofrecida para acreditar la causal primordial de invalidez levantada.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la defensa de Álvarez Bergh invocó como motivo principal de nulidad aquel previsto en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, en



relación con los artículos 19 N°3 inciso 6 y N°5, ambos de la Constitución Política de la República. Es así como alegó vulnerado su derecho a la intimidad o privacidad centrando la objeción en que una secretaria de la empresa Hydroflu, llamada Pilar Soto Barros, no solo accedió indebidamente a un correo electrónico enviado a la casilla particular de la dueña de la empresa, sino que además la trabajadora efectuó capturas de pantalla del aludido e-mail fuera de todo marco legal, motivo por el que se violentó su garantía a contar con un justo y racional procedimiento con repercusión directa en la privacidad en las comunicaciones.

A raíz de lo anterior, pide la declaración de nulidad de la sentencia definitiva y del juicio oral que la precedió con expresa exclusión de la cuestionada captura de pantalla.

En subsidio, promovió el motivo de invalidez previsto en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, sosteniendo que la sentencia impugnada incurrió en error de derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, al castigar al encartado por el delito de revelación de secreto. Lo anterior, en el entendido que éste resultó sancionado en sede administrativa por el mismo hecho que justificó la formulación de cargos penales por el referido delito. De esta forma, sostiene que la condena impuesta por el ilícito descrito infringe el principio cardinal del *non bis in idem* y, a consecuencia de ello, solicita la anulación del fallo atacado y posterior celebración de un nuevo juicio oral.

SEGUNDO: Que, en el considerando octavo de la sentencia impugnada los juzgadores del grado dieron por establecido el siguiente sustrato fáctico: *“Durante el mes de Marzo de 2017 el acusado Erik Andrés Álvarez Bergh, ejerciendo funciones como funcionario dependiente de la Dirección de Vialidad IX región, en particular jefe de taller de maquinarias, teniendo conocimiento en dicha virtud acerca de las bases de licitación de diversos contratos de mantención y*



reparación de maquinarias, de manera indebida anticipó los proyectos de bases de licitación pública de 3 contratos, a Alejandra Paulina Martínez Araya, dueña de HYDROFLU al correo electrónico alejandramartinez.hydroflu@gmail.com.

En efecto, violando su deber de reserva le remitió desde su correo electrónico erik.alvarez.bergh@gmail.com el 24 de marzo de 2017, al correo de la empresa Hydroflu ya indicado, los siguientes archivos, todos de Bases administrativas y de especificaciones técnicas de contratos que aún no se publicaban a todos los eventuales oferentes: “Servicios de mantención y reparación de motores hidráulicos-neumáticos y componentes, para maquinaria dirección de vialidad, provincia de cautín región de la Araucanía”; la de “Servicios de reparación, mantención de sistemas hidráulicos y neumáticos, bombas hidráulicas, y componentes para maquinaria, dirección de vialidad, provincia de cautín región de la Araucanía”; y la de “Servicios de reparación, mantención y confección de mangueras hidráulicas y neumáticas para maquinaria, dirección de vialidad, provincia de cautín región de la Araucanía” , correspondientes, respectivamente, a los contratos efectivamente publicados en la página www.mercadopublico.cl:

- 1) Licitación pública ID 4809-30-LE17, denominada “Servicio de reparación y mantención de motores hidráulicos-neumáticos y componentes para maquinaria”.
- 2) Licitación pública ID 4809-32-LE17, denominada “Servicios de reparación y mantención de sistemas hidráulicos y neumáticos, bombas hidráulicas y componentes para maquinaria”;
- 3) Licitación pública ID 4809-31-LE17, denominada “Servicio de reparación, mantención y confección de mangueras hidráulicas y neumáticas para maquinarias”;



Así las cosas, el acusado, debiendo guardar reserva de dichos proyectos de Bases de Licitación, incumpliendo sus deberes funcionarios entregó estos archivos a Alejandra Martínez Araya, antes de que ellas fueran debidamente publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, beneficiado a la empresa aludida, anticipándole así los requisitos para su postulación, en perjuicio de los otros eventuales oferentes.

Por otra parte, ejerciendo el acusado Erik Andrés Álvarez Bergh, en su calidad de jefe del área de taller de maquinaria vial o encargado provincial Cautín y en razón de dichas funciones y cargo, en el mes de diciembre de 2018 le solicitó a Víctor Alejandro Garcés Bravo y Alejandra Paulina Martínez Araya la suma de \$500.000 (quinientos mil pesos), dinero que ambos consintieron en darle en razón del cargo y funciones desempeñados por el acusado Álvarez Bergh en la Dirección de Vialidad IX región, beneficio económico que el acusado recibió y al cual no tenía derecho.”

El hecho recién descrito fue calificado por el *a quo* (considerando noveno) como constitutivo de los delitos consumados de violación de secreto, reglado en el inciso 3 del artículo 246, como también de cohecho, establecido en el inciso 1 del artículo 248, ambos del Código Penal.

Igualmente, es menester remarcar que el arbitrio de invalidez incoado por el condenado no hizo reparo alguno al establecimiento del aludido sustrato fáctico como tampoco a alguna irregularidad en el proceso de ponderación racional del caudal probatorio rendido en juicio. De esta forma, el análisis de las causales de nulidad promovidas se hará tomando como base la estructura fáctica establecida en única instancia.

TERCERO: Que en lo relativo a la protesta principal de nulidad, es necesario decir que el fallo atacado se hizo cargo de esta alegación en su



basamento décimo cuarto, al señalar acertadamente que el acceso de Pilar Soto Barros a los correos electrónicos de Alejandra Martínez Araya y de Víctor Garcés Bravo fue completamente lícito. Esto, en atención a que precisamente aquélla estaba autorizada por los dueños de la empresa para tal cometido, aserto que no solo provino de Pilar Soto Barros, sino que además fue ratificado por la testigo Susana Quilodrán Acuña quien cumplía labores de jefatura en la administración de Hydroflu. Es así como el proceder de Pilar Soto Barros -en cuanto ingresar a los correos electrónicos de Alejandra Martínez Araya y de Víctor Garcés Bravo- era conocido y avalado por la empresa ya que se entendía que formaba parte de las atribuciones que le fueron asignadas a aquélla, dado que en dichas casillas se manejaba información relativa a funciones y servicios propios de la empresa.

Enseguida, otro aspecto relevante a considerar para desestimar la infracción de garantías denunciada estriba en que, según la prueba aportada al juicio oral, el cuestionado correo electrónico fue recibido por Pilar Soto Barros en su condición de empleada dependiente y dentro de una cadena de reenvío proveniente precisamente de la dueña de la empresa Alejandra Martínez Araya. Entonces, como se advierte, tampoco es posible atribuir a Pilar Soto Barros alguna maquinación o proceder subterfugio o malicioso dirigido a acceder clandestinamente al contenido del referido mail, sino que, por el contrario, fue recibido a raíz de una remisión voluntaria de la propietaria de la empresa, en el contexto del desarrollo operacional habitual de Hydroflu.

Así las cosas, atendida la forma en que el e-mail fue recibido por Pilar Soto Barros, no es esperable ni exigible que ésta mantuviese respecto de su contenido una expectativa de privacidad respecto del emisor. Es más, desde un plano estrictamente normativo, la situación fáctica que gobierna la presente causa tampoco requería de autorización judicial previa en los términos previstos en el



artículo 9 del Código Procesal Penal, desde que la correspondencia electrónica fue facilitada voluntariamente por su receptora quien, como se dijo, recibió el e-mail de un modo normal y corriente en relación a la labor que cumplía al interior de la empresa, variables todas que descartan cualquier proceder ilícito en el actuar de Pilar Soto Barros.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento, incluso soslayando lo expresado precedentemente, igualmente la causal de nulidad debiese ser desechada por ausencia de trascendencia. En efecto, de una atenta lectura del motivo de invalidez se desprende que el cuestionamiento de ilicitud que expresa el recurrente fija su eje en la captura de pantalla materializada por Pilar Soto Barros respecto del e-mail enviado por el acusado. Empero, es menester indicar que además del aludido medio probatorio, en el juicio oral se desahogaron otros insumos de convicción y de igual calidad epistémica acerca del contenido del controvertido correo electrónico. Así, en el considerando sexto de la sentencia impugnada se consigna que depuso como testigo la trabajadora Pilar Soto Barros quien dio cuenta de toda la información asociada al delito y al mentado e-mail, de modo tal que igualmente era posible arribar a la decisión de condena con prescindencia de la captura de pantalla.

Como corolario a lo expuesto tanto en esta motivación como en la que precede, solo queda desestimar el motivo primordial de invalidez entablado por la defensa de Álvarez Bergh.

QUINTO: Que en lo que concierne a la causal subsidiaria promovida por el recurrente, esto es, cuando en el pronunciamiento del fallo se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en su parte dispositiva, vale recordar que fue reconducida a una presunta infracción al principio del *non*



bis in idem basado en la imposición de una sanción administrativa por el mismo hecho que, en esta oportunidad, fue castigado penalmente. Sin embargo, para desestimar tal alegación basta con mencionar que el artículo 139 inciso 3 del Decreto con Fuerza de Ley N°29 -que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo- señala que *“Cuando los hechos investigados y acreditados en el sumario pudieren importar la perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener, además, la petición de que se remitan los antecedentes a la justicia ordinaria, sin perjuicio de la denuncia que de los delitos debió hacerse en la oportunidad debida”*. Demás está señalar que el precepto transcrito sintoniza plenamente con lo dispuesto en el artículo 20 del Código Penal, al estatuir en su inciso 1 que *“No se reputan penas, la restricción o privación de libertad de los detenidos o sometidos a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales, la separación de los empleos públicos acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones o por el tribunal durante el proceso o para instruirlo, ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinal o atribuciones gubernativas”*.

Como se observa, es la propia legislación la que habilita y obliga expresamente a promover la apertura de la investigación penal derivada de los hechos que importen además responsabilidades administrativas, factor que, por lo tanto, impide considerar una transgresión al principio del *non bis in idem* como lo pretende la defensa en su recurso y que, en definitiva, conducirá al rechazo de la solicitud de invalidez subsidiaria incoada.



SEXTO: Que, una vez desechadas las dos protestas en que se sostiene el recurso de nulidad deducido a favor del sentenciado, sólo queda rechazar el arbitrio por no existir mérito para anular el fallo atacado.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85, 297, 341, 342, 373 letras a) y b), todos del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad incoado por la defensa del condenado **Erik Andrés Álvarez Bergh**, en contra de la sentencia de veintiséis de diciembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, en la causa RUC N°1901003244-2, RIT 205-2023 y del juicio oral que le antecedió, los que, por consiguiente, no son nulos.

Se previene que el abogado integrante Sr. Gandulfo, concurre al fallo considerando, además, que los artículos 20 del Código Penal y 139 inciso tercero de la ley N°18.834, en cuanto ellos implican una calificación legal de las sanciones involucradas en la causa, como de naturaleza divergente, sin existir una unidad de *ius puniendi*.

Redacción del fallo a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°825-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los ministros, Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G. y Sr. Eduardo Gandulfo R. Santiago, 02 de mayo de 2025.





En Santiago, a dos de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

